

U. San Sebastián descarta ilegalidad en contratos durante gobierno de Piñera

Cubillos. Exacadémica de la USS firmó millonarios tratos directos cuando era ministra de Educación.

Paris. Exministro de Salud durante la pandemia y otros funcionarios trabajaron para la misma casa de estudios.

D. Hermosilla

La Universidad San Sebastián obtuvo contratos por cerca de \$ 7 mil millones durante la pandemia, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, en contratos con el Ministerio de Salud, por el covid, y de Educación, entonces liderado por la ministra Marcela Cubillos. La USS ha manifestado que no hay ninguna irregularidad en los acuerdos firmados.

De acuerdo a un reportaje de Ciper, durante el segundo gobierno de Piñera, la casa de estudios experimentó un significativo aumento en sus ingresos por servicios a organismos públicos. Buena parte de la cifra corresponde a tratos directos con la exministra Cubillos. La hoy candidata a



Enrique Paris era ministro de Salud cuando se aplicaron los contratos con la USS / AGENCIA UNO

la alcaldía de Las Condes fue hasta hace poco profesora en esa universidad con un sueldo de cerca de \$ 17 millones.

Aparte, el reportaje destaca contratos con el Minsal, con \$ 2.169 millones por servicios de laboratorio durante la pandemia, pues la institución ingresó a la Red de Laboratorios Universitarios, financiada por el Estado.

Durante parte de la pandemia fue ministro de Salud Enrique Paris, quien tras el servicio público asumió la presidencia del Instituto de

“Autoridades favorecen a una institución y después son contratadas por esa misma universidad”.

JUAN SANTANA
Diputado del PS.

Políticas Públicas de Salud de la USS. “El procesamiento de muestras PCR por parte de la USS no fue gestionado por mí”,

aseguró el exministro a Ciper.

Su subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, también ingresó a la USS, en 2021, mientras que quien fuera director del Servicio de Salud Norte, Guillermo Hartwig, y quien firmó acuerdos con la USS, había trabajado antes en la casa de estudios.

Desde la Universidad San Sebastián descartaron cualquier irregularidad en los contratos aparecidos en el reportaje. En detalle, indicó sobre la participación en los procesamientos de exámenes

CIFRA

7.000

millones de pesos en un año recibió la USS por contratos públicos, un fuerte aumento respecto de años anteriores.

covid que “todos los procesos se realizaron bajo el marco de la ley de compras públicas, participando en procesos de selección de proveedores bajo la modalidad de trato directo, tal como lo define dicha ley”.

“Todas las actividades fueron reguladas mediante un contrato formal, que establecía de manera clara los plazos, cantidades de producción diaria, entrega de resultados diarios y el precio. La USS participó en los procesos de adjudicación de exámenes PCR contemplando precios acordes con los volúmenes demandados, que fueron similares o menores a lo cobrado por otras instituciones”, cerraron desde la USS.

Conocidos estos antecedentes, diputados oficialistas informaron que acudirán a la Contraloría.

Luis Cuello (PC) explicó que “durante el gobierno de Piñera, la USS pasó al top 500 de los proveedores del Estado. Al mismo tiempo que dentro del Ministerio estaban el exministro Paris y el exsubsecretario Zúñiga, que después, cosa curiosa, pasaron a ser altas autoridades de la universidad”.

Juan Santana (PS) agregó que observa un patrón, pues “autoridades utilizan sus cargos para favorecer a una institución de educación superior

PROCURTURA

Querella apunta a Boric

Diputados republicanos presentaron una querrela contra el cofundador de ProCultura, Alberto Larrain, por fraude al fisco por contratos con el Gore RM por más de \$ 1.600 millones sobre los que “no hubo control”, como señala el texto. El diputado Juan Irrazábal explicó que “los antecedentes estrechan el cerco sobre el Presidente Boric. Si no, no se explica que primero su actual mano derecha, y luego su expareja y incluso su terapeuta y amigo, estén vinculados en el caso a todo nivel”. En tanto, Anglo American también interpuso una querrela contra ProCultura, por \$ 290 millones que no han sido rendidos, según Interferencia. La acción busca la devolución del dinero y desligarse de los delitos.

y después son contratadas por esa misma universidad”.

Gael Yeomans (FA) pidió investigar porque “que exista un vínculo que termine siendo una caja pagadora de la UDI o de la derecha en general, tanto con recursos de la universidad como también los recursos del Estado, es algo que no se puede aceptar”.